



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20261700211211

Fecha: 16-04-2026

20261700211211

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

170

Secretario General (e):

ELIAS APONTE BUSTAMANTE

Concejo de Bogotá, D.C.

secretariageneral@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28A – 41

Bogotá D.C.

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

CONCEJO DE BOGOTÁ 20-04-2026 10:44:28

2026ER8156 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: % SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO/#GUSTAVO QUINTERO

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/APONTE BUSTAMANTE ELIAS

ASUNTO: PROPOSICION 338 DE 2026

OBS: RESPUESTA

Asunto: Respuesta a la Proposición No. 338 de 2026

Referencia: Radicados No. 20264211265482

Respetado Secretario:

En atención a la Proposición No. 338 de 2026, radicada en este despacho el 14 de abril del presente año, suscrita por el concejal Marco Fidel Acosta Rico, integrante de la bancada del partido Colombia Justa Libres, relacionada con el tema: *"Garantías institucionales para la protección de la libertad religiosa, la convivencia ciudadana y los límites del ejercicio de la protesta en Bogotá D.C., en el marco de los hechos ocurridos durante la Semana Santa en la Iglesia de San Francisco."*

Sobre el particular, dentro del marco de las competencias y funciones que corresponden a esta Secretaría, remito la respuesta a las preguntas números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 32 y 33 del cuestionario, suministrada por la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, según comunicación con radicado número 20263000143703 (anexo).

Cordialmente,

GUSTAVO QUINTERO ARDILA

Secretario Distrital de Gobierno

Gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Dos (doce folios en formato *pdf y una carpeta comprimida en formato *zip)

Proyectó: Margarita Consuelo Diago Hurtado – Profesional Universitaria Contratista DRP

Revisó: Ángela Patricia Cruz Vargas – Profesional Universitaria DRP

Evita del Pilar Ospina Marín - Contratista DRP

Aprobó: Carlos Alberto Aparicio Patiño – Director de Relaciones Políticas.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI-GPD-F032
Versión: 07
Vigencia: 24 de enero de 2024
Caso HOLA: 12936



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**MEMORANDO**

300

Bogotá D.C.,

PARA: CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO

Director de Relaciones Políticas

DE: LINA VANESSA LOZADA LEÓN

Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos

ASUNTO: Respuesta a Proposición No. 338 de 2026, presentada por el Honorable Concejal Marco Fidel Acosta Rico, relacionada con el tema: *"Garantías institucionales para la protección de la libertad religiosa, la convivencia ciudadana y los límites del ejercicio de la protesta en Bogotá D.C., en el marco de los hechos ocurridos durante la Semana Santa en la Iglesia de San Francisco."*

Referencia: 20261700135983

Respetado Director Aparicio, reciba un cordial saludo.

En el marco de las funciones y competencias de la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, la Dirección de Diálogo y Convivencia, la Dirección de Derechos Humanos y la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, acorde a lo dispuesto en el Decreto de Unificación Distrital 642 del 2025, nos permitimos brindar respuesta frente a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 32 y 33, en los siguientes términos:

I. Prevención y actuación institucional***1. ¿Qué acciones preventivas adoptó la Administración Distrital para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones religiosas durante la Semana Santa en Bogotá?***

En el marco de la ejecución de la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, la Administración Distrital, a través de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia, adoptó un conjunto de acciones preventivas y de coordinación interinstitucional orientadas a contribuir a la garantía efectiva del ejercicio de los derechos fundamentales, así como a facilitar las condiciones institucionales y comunitarias necesarias para su pleno desarrollo, conforme a los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de 1991 y a los compromisos internacionales ratificados por Colombia.

En este contexto, y con ocasión de celebraciones de alta concurrencia como la Semana Santa, se implementaron las siguientes acciones preventivas:



- Estrategias de sensibilización y formación dirigidas a servidores públicos, autoridades de policía y ciudadanía, orientadas al respeto, reconocimiento y protección de la libertad religiosa.
- Campañas de promoción del pluralismo religioso y la convivencia pacífica, encaminadas a prevenir actos de intolerancia y a fortalecer la cohesión social durante el desarrollo de las celebraciones.
- Fortalecimiento de los canales de articulación con organizaciones religiosas, con el fin de facilitar la coordinación institucional en escenarios de alta concurrencia y anticipar posibles situaciones de riesgo.
- Implementación de la ruta de promoción y atención de derechos fundamentales de religión, culto y conciencia, la cual establece procedimientos de prevención, atención y seguimiento frente a posibles vulneraciones en escenarios públicos y privados.

Estas acciones se enmarcan en la lógica de la Política Pública como instrumento de gestión intersectorial y de prevención de riesgos colectivos, orientado a disminuir factores que alimentan la intolerancia religiosa, garantizar el goce efectivo de los derechos en condiciones de igualdad y fortalecer la articulación entre entidades religiosas y estatales.

En este sentido, las medidas adoptadas deben entenderse como acciones anticipadas y estructuradas, orientadas a prevenir conflictos, vulneraciones o escenarios de intolerancia, y no como respuestas reactivas. Asimismo, su implementación responde a un marco normativo previamente definido, que compromete la corresponsabilidad de distintos sectores de la Administración Distrital, tales como Educación, Salud, Seguridad, Integración Social y Planeación, bajo un enfoque articulado de protección de derechos.

De este modo, la Administración Distrital no solo contribuye a garantizar el normal desarrollo de celebraciones religiosas de carácter colectivo, como la Semana Santa, sino que fortalece las condiciones para el ejercicio efectivo de las libertades de religión, culto y conciencia, promoviendo la convivencia pacífica y la construcción de una ciudadanía plural en Bogotá.

2. ¿Existía información previa sobre posibles manifestaciones o intervenciones en zonas de alta concentración religiosa?

Al respecto es preciso aclarar que el derecho a la manifestación pública y pacífica consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política, no está sujeto a autorización previa por parte de las autoridades, en tanto constituye una expresión directa de las libertades fundamentales de reunión y expresión, conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional (Sentencia C-223 de 2017).

En este sentido y como etapa previa a la eventual designación de equipo de gestores y gestoras, en tanto las manifestaciones sociales no requieren permisos para su realización, y la actuación de la Administración Distrital se enmarca en garantizar su ejercicio, acompañar su desarrollo y proteger tanto a quienes se manifiestan como a terceros, bajo un enfoque de derechos humanos. En este contexto, la Dirección de Convivencia y Diálogo Social recaba información a través de distintas fuentes o canales, tales como:

- (i) avisos previos por parte de las y los convocantes;
- (ii) reportes o comunicaciones de entidades del orden distrital o nacional;
- (iii) información suministrada por la Policía Metropolitana y el Ministerio Público;
- (iv) alertas provenientes de la ciudadanía;
- (v) insumos generados por los equipos territoriales de la DCDS–SDG.



Así las cosas y con relación objeto de esta proposición, se precisa que el único medio a través del cual se tuvo conocimiento previo del evento correspondió al monitoreo de redes sociales, mediante el cual se identificó la convocatoria denominada: ***“Protesta en contra de la religión y el abuso de poder de la élite mundial”***, atribuida a un colectivo convocante mas no información previa proveniente de canales institucionales formales o de aviso directo por los convocantes.

Igualmente, es importante señalar que en el marco de competencias de la Dirección de Derechos Humanos dispuestas en el Decreto de Unificación Distrital 642 de 2025 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gobierno”* compiló las disposiciones del Decreto 053 de 2023, mediante el cual se adoptó el *Protocolo Distrital para la Garantía y Protección de los Derechos a la Reunión, Manifestación Pública y la Protesta Social Pacífica*. En este Protocolo es donde se establece la guía metodológica para la adopción de medidas dirigidas a respetar y garantizar el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la reunión y manifestación pública y pacífica.

Es así, como se estableció que las entidades y autoridades del Distrito deben generar y promover escenarios de diálogo con las organizaciones convocantes de la movilización y protesta pacífica o con organizaciones defensoras de Derechos Humanos, así como de quienes no participan en ella, para prevenir la violencia, de manera previa, concomitante y posterior al desarrollo de una movilización. Para ello, se crearon varias instancias encargadas de mantener canales asertivos y en tiempo real de diálogo entre los manifestantes, los terceros y las entidades. Entre estas, la Mesa Distrital de coordinación y seguimiento y el Puesto de Mando Unificado, entre otras.

Así, el artículo 401 de la sección 2 del Decreto *ibidem* estableció que la Mesa Distrital de Coordinación y Seguimiento tendría el objetivo de adelantar labores de coordinación y seguimiento al respeto y garantía del derecho fundamental a la reunión y manifestación pública y pacífica y de los derechos de quienes no participan en ella.

Igualmente, el artículo 404 de la sección 2 establece que el Puesto de Mando Unificado (PMU) es una instanciainstitucional de carácter político-administrativo, encargada de la coordinación interinstitucional con el propósito de articular, supervisar y adoptar las acciones necesarias para garantizar los derechos ciudadanos.

En este sentido, a través de dichas instancias se adelantan acciones de **carácter previo, concomitante y posterior** orientadas al monitoreo permanente de los puntos de concentración y movilización, la promoción de escenarios de diálogo entre la institucionalidad y las personas manifestantes, y la activación de las entidades competentes frente a situaciones que puedan generar afectaciones a los derechos fundamentales, la movilidad o la seguridad ciudadana.

Estas actuaciones buscan fortalecer la articulación interinstitucional y la gestión institucional de las manifestaciones, procurando garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica y, a su vez, la protección de los derechos de la ciudadanía en general, en el marco de las competencias asignadas a cada entidad. Por lo tanto, las instancias de coordinación se convierten en espacios fundamentales para desarrollar acciones preventivas, cuando las manifestaciones son avisadas, acciones concomitantes, en aquellas situaciones donde las manifestaciones surgen de manera espontánea y acciones posteriores, como espacios propicios para el mejoramiento de las acciones interinstitucionales.



Ahora bien, en el marco de estas instancias, corresponde a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno ejercer la secretaría técnica, lo cual implica convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias a que haya lugar, elaborar las actas respectivas y adelantar las demás acciones propias de este rol.

Lo anterior tiene concordancia con el numeral 5.2 del Protocolo, el cual establece que: “*El aviso no es una condición para el ejercicio de la protesta. Cuando las manifestaciones sean espontáneas no es necesario el aviso previo sobre el lugar o recorrido*”. No obstante, el Protocolo sí contempla la implementación de acciones preventivas, entendidas como aquellas que se ejecutan con anterioridad a la jornada de protesta y que están orientadas a garantizar su libre y adecuado desarrollo. En este marco, y conforme a lo dispuesto en los numerales 5.3 y 6, la Secretaría Distrital de Gobierno adelanta acciones previas tales como:

“CAPÍTULO 1 ACCIONES PREVENTIVAS (...)

5.3. La Secretaría Distrital de Gobierno publicará en sus páginas web y en todos los medios de comunicación disponibles la dirección de correo electrónico para que la ciudadanía pueda informar sobre la realización de protestas.

*6. Informe al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Inmediatamente después de que la Secretaría Distrital de Gobierno sea avisada de la realización de una manifestación pública y pacífica, deberá comunicar a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería de Bogotá para que activen sus protocolos internos de acompañamiento, y a las demás autoridades que, por su misionalidad y objeto de la manifestación pública, consideren pertinentes. (...) **La Secretaría Distrital de Gobierno, una vez avisada, también deberá informar a la Policía Nacional la jornada de protesta y los posibles recorridos.** (negrillas y subrayado propio).*

Así mismo, el numeral 23 del protocolo señala que se realizarán, entre otras, las siguientes acciones:

“(...) 23. Actuaciones preliminares al desarrollo de las manifestaciones por parte de las autoridades político-administrativas y de policía.

- a) Centralizar la información en tiempo real a fin de informar las diferentes novedades que se presenten a través de los delegados ante el PMU designados por las instituciones, la Policía, las organizaciones convocantes, organizaciones de la sociedad civil y las CVI, quienes servirán como enlaces de sus equipos en terreno y la instancia de coordinación.*
- c) Los delegados institucionales ante el PMU y Puesto de Mando Institucional PMI deberán mantener comunicación directa y constantemente, transmitiendo en tiempo real las novedades y decisiones de cada instancia” (Subrayado y negrilla propia).*

En ese sentido, cuando una manifestación es informada, las entidades pueden implementar acciones preventivas tendientes a informar de manera anticipada de la movilización a terceros, con la finalidad que puedan prepararse adecuadamente y tomar medidas alternativas en materia de movilidad. Asimismo, cuando los convocantes manifiestan su interés en establecer un diálogo articulado con las entidades distritales, se convoca una sesión de la Mesa Distrital de Coordinación y Seguimiento, para conocer con antelación los detalles de las manifestaciones.

Bajo este contexto, se contó con información derivada de la convocatoria pública en redes sociales, sin mayor información. Teniendo en cuenta lo anterior, si bien en el presente caso no se llevó a cabo la instalación de la Mesa Distrital de Coordinación y Seguimiento, toda vez que no se evidenció intención por parte de los convocantes de establecer un diálogo articulado con las entidades Distritales, se dispuso previamente la



preparación y alistamiento de equipos en terreno para la atención de la jornada, así como la instalación anticipada del Puesto de Mando Unificado -PMU-, como acciones de carácter previo orientadas a garantizar el monitoreo permanente a través de actualización de reportes como de recursos y la capacidad de respuesta institucional frente al seguimiento de aforo. Así mismo, se adelantaron acciones concomitantes y posteriores en el marco de la atención integral de la manifestación, las cuales se describen en el acta que se adjunta como anexo.

En consecuencia, si bien no se contó con un escenario formal de articulación con los convocantes, la información disponible permitió a la Dirección de Derechos Humanos, en el marco de las funciones establecidas en el Decreto Distrital 642 de 2025, anticipar la adopción de medidas preventivas orientadas a garantizar el seguimiento, la atención oportuna de la jornada y la protección de los derechos de la ciudadanía, a través de la instalación del PMU.

3. ¿Qué coordinación interinstitucional se realizó entre las entidades distritales para prevenir alteraciones del orden público en estos espacios?

Para brindar respuesta al numeral 3, resulta pertinente, en primer lugar, abordar lo referente a las **acciones concomitantes**. En esta línea, dichas acciones se definen como aquellas que se ejecutan con el fin de garantizar el ejercicio de la manifestación pública y salvaguardar a quienes participan o no en las mismas. Así, dentro de las acciones concomitantes a cargo de la Secretaría de Gobierno, el numeral 23 del protocolo que dispone:

“CAPÍTULO III ACCIONES CONCOMITANTES En los casos que se presente manifestaciones espontáneas que requieran de actuaciones institucionales urgentes, la Secretaría Distrital de Gobierno deberá citar extraordinariamente un Puesto de Mando Unificado-PMU, al que deberán acudir de manera inmediata quienes componen esta instancia de coordinación. Para estos casos, el Puesto de Mando Unificado - PMU atendiendo a sus funciones, deberá: (...)j) La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Derechos Humanos realizará el levantamiento del acta respectiva que deberá ser aprobada en un tiempo no mayor a cinco (5) días a partir del día siguiente al levantamiento del PMU(...)” (subrayado y negrilla propia).

En virtud de lo anterior, la coordinación interinstitucional se materializó a través de la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) por parte de la Dirección de Derechos Humanos, desde el cual se realizó seguimiento y monitoreo permanente a los puntos de manifestación reportados en la ciudad durante el jueves 2 de abril de 2026. En particular, se efectuó el seguimiento a la movilización denominada “*En contra de la religión y el abuso de poder de la élite mundial*”.

De esta forma, y en el marco del objetivo de primacía del diálogo¹, bajo el cual las entidades y autoridades del Distrito deben generar y promover escenarios de diálogo con las organizaciones convocantes de la movilización y protesta pacífica o con organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de quienes no participan en ella, se promovieron acciones de diálogo y gestión institucional orientadas a la mitigación de tensiones y a la prevención de alteraciones del orden público durante la jornada, entre las cuales se destacan:

- ✓ La sensibilización dirigida tanto a manifestantes como a ciudadanía externa frente a comportamientos que generaron tensión en el desarrollo de la jornada.

¹ 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (...) 2.6. Privilegiar el diálogo y la negociación en cualquier escenario o modalidad de movilización y protesta social, como elemento determinante y principal en el acompañamiento y prevención de hechos de violencia.



- ✓ La implementación de espacios de diálogo directo con los manifestantes, orientados a conocer sus intenciones de recorrido, uso del espacio público y desarrollo de actividades, facilitando la coordinación interinstitucional.
- ✓ La articulación con entidades como la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio para la implementación de cierres viales y desvíos, contribuyendo a la mitigación de riesgos en la movilidad.
- ✓ La intervención oportuna de los equipos en territorio para la desescalada de conflictos entre manifestantes, transeúntes y feligreses en inmediaciones de los puntos de concentración.
- ✓ La socialización con los manifestantes sobre la presencia de la fuerza pública en el marco de los dispositivos de seguridad de Semana Santa, con el fin de prevenir escenarios de confrontación, conforme a lo dispuesto en el *Protocolo Distrital para la Garantía y Protección de los Derechos a la Reunión, Manifestación Pública y la Protesta Social Pacífica*.
- ✓ El acompañamiento permanente de los equipos de diálogo y de derechos humanos a lo largo del recorrido, priorizando la garantía de derechos y la convivencia pacífica.
- ✓ El reporte y verificación de alertas de posibles escenarios de violencia.

Estas actuaciones se realizaron con el propósito de propiciar canales de interlocución institucional y contribuir a la gestión de la situación, en el marco de las competencias de las entidades que integran esta instancia de coordinación y seguimiento. Como resultado, las tensiones fueron desescaladas de manera progresiva, permitiendo la continuidad de la manifestación, en condiciones acordes con la garantía de derechos y la convivencia ciudadana.

Ahora bien, es importante precisar que, en el marco del Protocolo, los equipos de gestores de convivencia no tienen funciones de orden público, por lo que no pueden adelantar intervenciones de contacto físico o coercitivo sobre las personas, dado que su actuación se fundamenta exclusivamente en el diálogo, la mediación y la prevención de conflictos a través de la construcción de acuerdos, respetando en todo momento la integridad de los ciudadanos.

Finalmente, en el marco de las acciones posteriores, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del citado protocolo, que establece: *“45. Acciones posteriores. se entiende por acciones posteriores, aquellas realizadas por las autoridades político-administrativas y de policía en el inmediato o mediano plazo según lo ameriten los hechos presentados durante las movilizaciones, cuando la manifestación pública haya terminado, bien sea por decisión propia de los manifestantes o por haber sido disuelta, atendiendo a los fines de protección y garantía de los derechos fundamentales, la convivencia y seguridad ciudadana, y la conservación del orden público”*; durante el balance final² del PMU, y en consideración a las confrontaciones registradas en el desarrollo de la manifestación, se formularon recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la comunicación en terreno y el trato respetuoso entre los actores involucrados, como insumo para la mejora de futuras manifestaciones.

Ahora bien, frente a la coordinación interinstitucional desde la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia para prevenir alteraciones del orden público en el marco de celebraciones religiosas, es importante precisar que no tiene competencias en materia de manejo operativo del orden público ni de regulación de movilizaciones sociales. No obstante, desde su ámbito funcional y en el marco de la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia (CONPES 12 de 2019), la coordinación interinstitucional se desarrolla de manera preventiva y estructural, orientada a mitigar riesgos de conflictividad social asociados al hecho religioso, mediante las siguientes acciones:

² El balance final del PMU consiste en la consolidación de la información sobre el desarrollo de la jornada, a partir de los reportes presentados por cada una de las entidades participantes en el PMU, incluyendo el comportamiento de la manifestación, las novedades registradas y la gestión institucional realizada, así como la formulación de recomendaciones para fortalecer la articulación y la garantía de derechos en futuras manifestaciones.



1. Implementación de acciones de política pública:

- Capacitación a actores institucionales, incluyendo servidores públicos, autoridades administrativas y de policía, orientadas al reconocimiento del alcance del derecho fundamental a la libertad religiosa y a la gestión adecuada de escenarios de pluralidad.
- Estrategias de prevención de conflictos, a través del fortalecimiento del diálogo interreligioso e interinstitucional en las localidades, mediante espacios como los Comités Locales de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia, que permiten anticipar y tramitar tensiones sociales.
- Promoción del respeto por la diversidad religiosa, dirigidas a la ciudadanía, con el propósito de prevenir actos de intolerancia, discriminación o estigmatización que puedan incidir en la convivencia.

2. Articulación con actores del sector religioso:

- Interacción permanente con líderes y organizaciones religiosas, con el fin de facilitar el desarrollo adecuado de sus actividades y celebraciones.
- Acompañamiento técnico y orientación institucional, mediante la socialización de rutas de atención, canales de interlocución y oferta distrital disponible frente a posibles vulneraciones de derechos.
- Fortalecimiento de escenarios de participación, que permiten identificar alertas tempranas, canalizar inquietudes y promover soluciones concertadas bajo un enfoque de corresponsabilidad

En este sentido, la coordinación interinstitucional que lidera la Subdirección se orienta a la prevención de escenarios de intolerancia y conflictividad, mediante acciones anticipadas de gestión social del riesgo, sin perjuicio de las competencias que en materia de orden público ejercen otras entidades del Distrito.

De este modo, ante contextos de potencial tensión, como la coincidencia de distintas expresiones o manifestaciones en el espacio público, el enfoque institucional se centra en promover condiciones de respeto, diálogo y garantía de derechos, contribuyendo a la convivencia pacífica y al adecuado desarrollo de las celebraciones religiosas.

4. ¿Cuál fue la reacción institucional frente a los hechos ocurridos en la Iglesia de San Francisco y en qué tiempos se activaron los protocolos de respuesta?

En atención a los hechos ocurridos en inmediaciones de la Iglesia de San Francisco, la reacción institucional, en el marco de las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno y en concordancia con lo dispuesto en el *Protocolo Distrital para la Garantía y Protección de los Derechos a la Reunión, Manifestación Pública y la Protesta Social Pacífica*, consistió en la activación oportuna de mecanismos de coordinación y seguimiento desde el inicio de la jornada.

En este sentido, tal como se indicó previamente, se dispuso la instalación del Puesto de Mando Unificado - PMU- desde las 09:40 horas del 2 de abril de 2026, como instancia de articulación interinstitucional para el monitoreo permanente de la manifestación y la toma de decisiones en tiempo real. A través de este espacio, las entidades Distritales realizaron seguimiento continuo al desarrollo de la movilización, incluyendo su paso por la Iglesia de San Francisco, donde se registraron tensiones entre manifestantes, feligreses y la fuerza pública.



En el marco de esta instancia, se adoptaron medidas inmediatas orientadas a la gestión de la situación, entre las cuales se destacan: la promoción de acciones de diálogo y sensibilización en territorio para desescalar conflictos; la coordinación con las autoridades de Policía para solicitar la adopción de medidas que redujeran la tensión, como el distanciamiento de unidades en puntos críticos; y la articulación entre entidades para atender de manera oportuna las situaciones reportadas durante el desarrollo de la manifestación. Así mismo, se realizó monitoreo permanente mediante reportes en tiempo real de los equipos en terreno, lo que permitió una respuesta institucional continua y ajustada a la evolución de los hechos.

De acuerdo con lo consignado en el acta del PMU, las situaciones de tensión presentadas en inmediaciones de la Iglesia de San Francisco fueron atendidas de manera inmediata a través de estas acciones coordinadas, logrando su desescalamiento y permitiendo la continuidad de la movilización.

En consecuencia, las acciones desarrolladas en el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU) reflejan el compromiso institucional por implementar mecanismos de coordinación interinstitucional y gestión adecuada de las manifestaciones públicas, con un enfoque preventivo, diferencial y respetuoso del marco normativo vigente.

Este enfoque permite una actuación articulada de las entidades Distritales y Nacionales en escenarios de movilización social, garantizando el cumplimiento de sus funciones conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y teniendo como prioridad la protección de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas. Así las cosas, se contribuye al fortalecimiento de los canales de atención y respuesta institucional, mejorando las capacidades operativas para la identificación de riesgos, la mitigación de impactos y la promoción de condiciones que favorezcan el manejo adecuado de estos escenarios.

De esta manera, las actuaciones descritas se adelantaron en ejercicio de las funciones y competencias asignadas a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, relacionadas con la garantía y protección del derecho fundamental a la reunión, la manifestación pública y la protesta social pacífica, de conformidad con el marco normativo previamente señalado en el presente documento. En ese sentido, la intervención de dicha Dirección se circunscribe a las labores de monitoreo, seguimiento y articulación institucional, en el marco de sus competencias. Como sustento de lo anterior, se adjunta el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU)-correspondiente a la manifestación denominada “*Protesta en contra de la religión y el abuso de poder de la élite mundial*” llevada a cabo el 2 de abril de 2026, elaborada con base en los insumos obtenidos en el marco del Decreto 642 de 2025.

Adicionalmente, la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia una vez conocidos los hechos ocurridos en la Iglesia de San Francisco adelantó actuaciones de carácter institucional orientadas al acompañamiento y la articulación con el sector religioso.

En relación con los tiempos de respuesta por parte de esta Subdirección, las actuaciones se desarrollaron de manera posterior al acontecimiento de los hechos, en tanto la activación formal de la Ruta de promoción y atención de derechos fundamentales de religión, culto y conciencia requiere solicitud del ciudadano afectado. De acuerdo con el Instructivo Versión 03 de 2025, dicha ruta se activa a partir de la recepción de una petición o queja formal por parte de las personas afectadas o por remisión de una entidad competente, al tratarse de un proceso de atención especializada que implica indagación, orientación y análisis de situaciones de riesgo.

Sin perjuicio de lo anterior, y en ejercicio de sus funciones de interlocución y fortalecimiento de la relación con comunidades religiosas, la Subdirección remitió comunicación oficial a la Arquidiócesis de Bogotá, invitando a



sostener un espacio de diálogo sobre lo ocurrido en las iglesias de San Francisco, Las Nieves y Las Aguas, con el propósito de escuchar sus apreciaciones y atender sus requerimientos.

Como resultado, el jueves 9 de abril a las 2:00 p.m. se llevó a cabo un encuentro en la Iglesia de La Veracruz entre representantes de la Iglesia de San Francisco y el Subdirector de Asuntos de Libertad Religiosa, en el que se acordó avanzar en una mesa de trabajo convocada por la Arquidiócesis de Bogotá, con participación de la Subdirección, orientada a la articulación de acciones de acompañamiento institucional.

Estas actuaciones no constituyen la activación formal de la Ruta de atención, sino el ejercicio de las funciones propias de la política pública, dirigidas a promover el diálogo, fortalecer la confianza institucional y contribuir a la garantía del ejercicio de la libertad religiosa.

II. Orden público y control territorial

5. ¿Cómo explica la Administración Distrital que una manifestación haya logrado irrumpir en un templo en pleno acto religioso sin contención previa?

Con base en la verificación de la información de acompañamiento disponible, es menester precisar que los hechos objeto de consulta no corresponden a una irrupción de la manifestación al interior de templos religiosos, por el contrario, se evidenció que la concentración y desarrollo de la actividad convocada se llevó a cabo en el espacio público aledaño.

En este sentido, no se evidenció una ocupación organizada ni el ingreso colectivo deliberado al interior del recinto religioso por parte de las personas convocantes, sino una dinámica de interacción en el espacio público circundante, en el que confluyeron participantes de la manifestación y feligreses que se encontraban en el lugar con ocasión del acto religioso.

Ahora bien, frente a la alteración del orden presentada en ese espacio, se precisa que esta obedeció a una escalada de conflictividad derivada de agresiones recíprocas entre algunos asistentes al acto religioso y personas participantes en la concentración, lo cual generó tensiones en el entorno inmediato del lugar de culto.

Frente a la actuación institucional, los equipos de gestores y gestoras de diálogo social hicieron presencia en el lugar y mantuvieron canales permanentes de comunicación con las personas convocantes, promoviendo acciones orientadas al desescalamiento del conflicto. En desarrollo de estas intervenciones, se implementaron medidas de contención no coercitivas, tales como la conformación de cordones humanos y la mediación directa, con el fin de facilitar el ingreso y egreso seguro de las y los feligreses, así como de mitigar los niveles de confrontación y prevenir nuevas agresiones.

Las acciones de control y contención del orden público en sentido estricto corresponden a la Policía Metropolitana, en el marco de sus funciones constitucionales y legales. En consecuencia, no resulta procedente afirmar la inexistencia de contención institucional, en tanto no se configuró una irrupción al interior del templo y se desplegaron medidas orientadas a la mitigación del riesgo y la protección de las personas presentes.



6. ¿Qué protocolos se activaron para la protección de lugares de culto durante la Semana Santa y por qué no fueron suficientes?

En el marco de la conmemoración de la Semana Mayor, la Administración Distrital, en articulación con las entidades competentes, activó las acciones institucionales orientadas a la prevención de riesgos y a la garantía de la convivencia y la seguridad en espacios de alta afluencia de público, incluidos los lugares de culto.

Por su parte, la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, enmarcó su actuación en lo dispuesto en el Decreto Distrital 642 de 2025, Subcapítulo 1, artículo 395 y siguientes, mediante el cual se adopta el “Protocolo Distrital Para La Garantía y Protección de los Derechos a la Reunión, Manifestación Pública y La Protesta Social Pacífica”, respecto de las movilizaciones desarrolladas,

Para o anterior, se implementan acciones de articulación interinstitucional que involucran, entre otros, a la Policía Nacional, autoridades administrativas y equipos territoriales. Esto, con el propósito de adoptar medidas de carácter preventivo, disuasivo y de acompañamiento, de acuerdo con las competencias asignadas a cada Entidad.

Se precisa que las situaciones de conflictividad presentadas no obedecen a la ausencia o insuficiencia de los protocolos institucionales, sino a la concurrencia de dinámicas de confrontación entre particulares en el espacio público, que derivaron en alteraciones del orden en el entorno inmediato del lugar de culto, las cuales fueron atendidas de manera oportuna, logrando contener su escalamiento.

Este tipo de escenarios, por su naturaleza dinámica y contingente, son abordados mediante la actuación concurrente y coordinada de las entidades competentes, en el marco de los principios de diálogo y diferenciación, y, como última ratio, bajo los criterios de absoluta necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, los cuales se aplicarán en los siguientes casos³:

(...)1. Principio de absoluta necesidad en el uso de la fuerza: Las autoridades de policía en manifestaciones públicas aplicarán los medios consagrados en la ley indispensables e idóneos para la efectiva protección y garantía de los derechos fundamentales, el restablecimiento y el mantenimiento de la convivencia con el fin de prevenir el escalamiento de los conflictos sociales, de quienes se encuentran en riesgo determinable y solo cuando la aplicación de otros medios existentes resulten ineficaces e inoportunos para la debida garantía del ejercicio de los derechos, en el marco de la manifestación pública.

13. Principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza: *El ejercicio de toda actividad de policía debe hacerse de manera moderada y adecuada a las finalidades legítimas perseguidas, para lo cual, toda respuesta deberá limitarse estrictamente a seleccionar entre los medios eficaces aquellos que causen una menor afectación a los derechos y libertades que se pretenden garantizar. En todo caso, se evitará cualquier uso innecesario de la fuerza(...)*

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2, 18, 19 y 20) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 18, 19, 21 y 26), que consagran los principios de igualdad y no discriminación, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.

De igual forma, se atienden los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha reiterado el deber de los Estados

³ Decreto Distrital 642 de 2025, Subcapítulo 1, artículo 396.



de garantizar el ejercicio de estos derechos sin discriminación por razones de identidad de género u otras condiciones, así como de adoptar medidas para prevenir escenarios de violencia o confrontación entre grupos con posturas divergentes.

En tal sentido, la actuación de la Administración Distrital se orienta a garantizar la coexistencia armónica de derechos, asegurando tanto el ejercicio de la libertad religiosa como el derecho a la manifestación pública, mediante la implementación de medidas de prevención, acompañamiento y gestión pacífica de conflictos, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

10. Sírvese informar si en los días 2, 3, 4 y 5 de abril del 2026 había gestores de diálogo social enviados por la Dirección de Diálogo Social acompañando la marcha de los grupos autodenominados Transpetristas y Satánicas.

Frente a la inquietud formulada, se informa que el equipo de gestores y gestoras de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social brindó acompañamiento únicamente el 2 de abril de 2026, en el marco de la única movilización identificada, de conformidad con la competencia y la misionalidad asignadas a esta dependencia.

13. Sírvese informar qué acciones se tomaron por parte de la administración distrital después de los hechos ocurridos en las marchas del 7 de octubre de 2025, en donde se reportó un ataque Vandálico a la Iglesia Cristiana Dios Está Formando Un pueblo, para evitar que estas situaciones volvieran a presentarse a futuro.

En concordancia a lo dispuesto en el Decreto 051 de 2023 que modificó el Decreto Distrital 411 de 2016, la Dirección de Convivencia y Diálogo Social el 7 de octubre de 2025, realizó acompañamiento a diferentes movilizaciones en “Apoyo al pueblo palestino y en contra del conflicto entre Israel y Palestina”, las cuales partieron de diferentes zonas de la ciudad y se unieron en el punto carrera 7 con calle 45 con un aforo aproximado de 500 personas.

De acuerdo a la bitácora registrada el equipo de gestores reportó daños a paradero 274A00 y paredes de algunos establecimientos, entre ellos la *Iglesia Cristiana Dios Está Formando Un pueblo*. Información que fue reportada en tiempo real al Puesto de Mando Unificado -PMU- para la adopción de acciones pertinentes. Se adjunta acta de PMU.

III. Libertad religiosa y derechos fundamentales

14. ¿Reconoce la Administración Distrital que los hechos ocurridos constituyen una posible vulneración al derecho fundamental a la libertad de culto?

El artículo 19 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva, lo cual comprende:

- La libertad de practicar cultos en espacios públicos o privados.
- La realización de ceremonias religiosas sin interferencias indebidas.
- La protección frente a actos que impidan, obstaculicen o perturben su ejercicio.

La Corte Constitucional ha señalado que este derecho incluye una dimensión externa protegida, consistente en la manifestación pública del culto, la cual no puede ser restringida arbitrariamente (Sentencia C-088 de 1994).



En atención al interrogante formulado, es pertinente señalar lo siguiente:

En el marco de sus competencias, la Administración Distrital identifica que hechos que impliquen la interrupción, perturbación o afectación del normal desarrollo de celebraciones religiosas, como los acontecidos durante la Semana Mayor en las iglesias de San Francisco, Las Nieves y Las Aguas, podrían configurar una presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad de culto, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 133 de 1994.

No obstante, es importante precisar que no corresponde a la Secretaría de Gobierno calificar jurídicamente si las acciones desarrolladas en el marco de movilizaciones sociales constituyen, en cada caso concreto, una vulneración de derechos fundamentales, ni determinar responsabilidades individuales o colectivas, funciones que recaen en las autoridades judiciales competentes.

De manera complementaria, el ordenamiento jurídico colombiano contempla disposiciones aplicables a este tipo de situaciones, como los artículos 201 y 202 del Código Penal, que sancionan, respectivamente, el impedimento o perturbación de ceremonias religiosas y los agravios contra cultos legalmente permitidos, cuya aplicación depende de la verificación de los hechos, la identificación de los responsables y el análisis por parte de las autoridades competentes.

En este sentido, la determinación definitiva sobre la existencia de una vulneración exige un análisis integral que incluya:

- La verificación de las circunstancias fácticas.
- La identificación de los responsables.
- La ponderación con otros derechos fundamentales eventualmente involucrados, en particular el derecho a la protesta, garantizando que su ejercicio no afecte desproporcionadamente los derechos de terceros.

Por su parte, esta Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos a través de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia de la Secretaría de Gobierno, en cumplimiento de su mandato, adelantó acciones de interlocución y acompañamiento institucional con la Arquidiócesis de Bogotá, orientadas a promover el diálogo, fortalecer la confianza y contribuir a la garantía del ejercicio de la libertad religiosa, en el marco de la política pública.

15. ¿Qué acciones concretas ha implementado el Distrito para garantizar el respeto a la libertad religiosa en espacios públicos y privados?

En el marco de la garantía del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, y en cumplimiento de lo establecido en la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia (CONPES D.C. 12), la Secretaría de Gobierno a través de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia orienta sus acciones a:

- I. Reducir los factores sociales, culturales e institucionales que alimentan la intolerancia religiosa, mediante procesos de capacitación, sensibilización y campañas interreligiosas que fomentan el respeto y el entendimiento mutuo entre las diversas comunidades religiosas de la ciudad.



- II. Fortalecer las capacidades institucionales y sociales para la garantía efectiva de la libertad religiosa, a través de la formación a servidores públicos, medios de comunicación y líderes religiosos, contribuyendo a la protección y promoción de este derecho fundamental.

En este sentido, estas acciones están dirigidas a prevenir afectaciones a la libertad religiosa y a garantizar su ejercicio pleno, particularmente frente a situaciones que puedan interferir en el desarrollo de ceremonias religiosas, tanto en espacios públicos como privados.

En consecuencia, a continuación, se presentan los principales avances alcanzados desde el año 2025 a la fecha:

1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales

Durante el año 2025, la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa de Conciencia cumplió con la meta estratégica 2.4 del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", alcanzando un 100% de ejecución en los procesos de sensibilización y capacitación en libertades fundamentales de religión, culto y conciencia. En total, se llevaron a cabo 4 eventos de capacitación, beneficiando a 173 servidores públicos, 50 periodistas y miembros de la Policía Metropolitana, fortaleciendo la capacidad institucional para prevenir e intervenir en situaciones que puedan afectar el desarrollo de prácticas y ceremonias religiosas.

2. Creación y fortalecimiento de los Comités Locales de Libertad Religiosa

En cumplimiento del Acuerdo Distrital 685 de 2017 y el Decreto 642 de 2025, se consolidaron 19 Comités Locales de Libertad Religiosa. Estos espacios territoriales han permitido gestionar de manera preventiva y oportuna situaciones de conflicto o tensión que puedan interferir en el ejercicio de la libertad religiosa, promoviendo el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica. Durante 2025, se realizaron 66 eventos de sensibilización, con la participación de más de 1.800 personas.

3. Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa (BPCLR)

En la vigencia 2025, se destinaron \$500.000.000 para financiar 37 iniciativas lideradas por organizaciones religiosas, con impacto en aproximadamente 1.400 personas. Estas acciones fortalecen el tejido social y contribuyen a la prevención de escenarios de conflictividad que puedan derivar en afectaciones al ejercicio de la libertad religiosa.

4. Ruta de Atención para la Libertad Religiosa

La implementación de la Ruta Distrital para la Libertad Religiosa ha permitido contar con un mecanismo institucional para la atención oportuna de situaciones que afecten el ejercicio del derecho, incluyendo aquellas que puedan interferir en ceremonias religiosas. A través de esta ruta se garantiza la orientación, acompañamiento, canalización y seguimiento de los casos reportados, asegurando la activación de las entidades competentes.

Es importante precisar que, si bien una persona puede requerir múltiples intervenciones, los casos recepcionados por primera vez corresponde a un total de cincuenta (50) personas como. Al respecto:



Localidad del Hecho:

Tabla 1. Localidad de los Hechos - Personas Atendidas por Primera Vez a través de la Ruta por la Libertad Religiosa, de Culto y Conciencia, (Vigencia 2025).

Localidad	Total	%
1. Usaquén	2	4%
2. Chapinero	1	2%
3. Santa Fe	1	2%
4. San Cristóbal	5	10%
5. Usme	3	6%
6. Tunjuelito	4	8%
7. Bosa	2	4%
8. Kennedy	13	26%
11. Suba	5	10%
12. Barrios Unidos	1	2%
13. Teusaquillo	1	2%
16. Puente Aranda	1	2%
19. Ciudad Bolívar	1	2%
No Reportado	10	20%
Total	50	100%

Fuente: Elaborado con base en el módulo "Rutas de Atención de Derechos Humanos" del Sistema de Información

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2025

Nota: los registros en la categoría de "No Reportado" obedecen a la aplicación de protocolos de confidencialidad o al suministro de información parcial durante la fase de recepción de datos.

El fenómeno de la vulneración a la libertad religiosa en Bogotá presenta una presencia extendida, con registros en 13 de las 20 localidades del Distrito. Esta dispersión geográfica demuestra que no se trata de una problemática aislada o sectorial, sino de un desafío transversal que afecta la convivencia en gran parte de la capital.

La intensidad de estos casos se concentra principalmente en Kennedy, San Cristóbal, Suba y Tunjuelito. Estas cuatro zonas agrupan el 54% de las víctimas (27 de un total de 50), consolidándose como los puntos de mayor criticidad. En un segundo renglón de incidencia se ubican Usme, Bosa y Usaquén, que representan el 14% de los casos, mientras que el 12% restante se distribuye en localidades como Barrios Unidos, Chapinero, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Santa Fe y Teusaquillo.



Al examinar las variables cualitativas, se observa un patrón claro: la afectación psicológica es la consecuencia predominante en la mayoría de los territorios. En cuanto a la tipología de la agresión, la conducta más reportada es la discriminación en el ejercicio de las capellanías, lo que sugiere barreras específicas para el desarrollo de esta labor pastoral.

De acuerdo con lo anterior, con el objetivo de ofrecer una visión sistémica, este análisis relaciona los hallazgos locales con el panorama global de las agresiones, permitiendo identificar las tendencias recurrentes que vulneran la integridad de las víctimas en toda la ciudad.

Afectación a las Víctimas:

Es importante advertir que el volumen total de afectaciones registradas será superior al número de víctimas contabilizadas. Lo anterior obedece a que una misma persona puede reportar múltiples tipos de afectación de manera simultánea.

Tabla 2. Afectación a la Víctima - Personas Atendidas por Primera Vez a través de la Ruta por la Libertad Religiosa, de Culto y Conciencia, (Vigencia 2025).

Afectación a la Víctimas	Total	%
Psicológica	35	50.7%
Afectaciones a la Vida e Integridad	17	24.6%
Familiar	7	10.1%
Laboral	4	5.8%
Física	2	2.9%
Total	69	100%

*Fuente: Elaborado con base en el módulo "Rutas de Atención de Derechos Humanos" del Sistema de Información
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2025*

Es imperativo señalar que el impacto sobre las víctimas es de naturaleza multidimensional. El registro de 69 afectaciones para un grupo de 50 personas evidencia una clara tendencia a la "polivictimización", un fenómeno donde un solo individuo experimenta simultáneamente diversos tipos de daño. De acuerdo con la *Tabla 2*, el perfil de la agresión revela que el daño "Psicológico" es la afectación predominante con 35 registros (50.7%), consolidándose como la principal secuela de la discriminación y exigiendo, por tanto, un enfoque de atención psicosocial robusto en las rutas de atención.

Esta vulneración emocional se ve agravada por el "Riesgo a la Vida e Integridad", que representa casi una cuarta parte de los reportes con 17 casos (24.6%); estas amenazas directas contra la existencia de la persona sitúan la libertad religiosa como un derecho en alto riesgo físico en ciertos entornos urbanos.

Por otro lado, se identifican afectaciones en las dimensiones "Familiar" (10.1%) y "Laboral" (5.8%), las cuales demuestran cómo la intolerancia permea los espacios más íntimos y productivos de la víctima, fracturando sus redes de apoyo y su sustento económico. Finalmente, aunque la incidencia de daño "Físico" directo registra el



porcentaje más bajo con un 2.9%, su presencia es una alerta crítica que indica el potencial de la agresión verbal o psicológica para escalar hacia la violencia física.

Posibles Conductas Delictivas Asociadas al Hecho:

Tabla 3. Conducta Delictiva - Personas Atendidas por Primera Vez a través de la Ruta por la Libertad Religiosa, de Culto y Conciencia, (Vigencia 2025).

Conducta Delictiva	Total	%
Discriminación en el Ejercicio de las Capellanías	19	48.7%
Burlas	6	15.3%
Trato Displicente a las Prácticas o Costumbres Derivadas de las Creencias Religiosas (Servidores Públicos)	6	15.3%
Disposiciones Institucionales que Obligan a Prácticas Religiosas en Contra de sus Creencias Personales (Servidores Públicos)	4	10.2%
Discriminación a niños y niñas en colegios y centro del Estado por causa de sus creencias o costumbres religiosas	2	5.1%
Invocaciones o Consagraciones a un Credo Religioso Específico a través de Medios Institucionales (Servidores Públicos)	1	2.5%
Otras No Especificadas	1	2.5%
Total	39	100%

*Fuente: Elaborado con base en el módulo "Rutas de Atención de Derechos Humanos" del Sistema de Información
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2025*

De un total de 39 conductas identificadas, se observa una marcada prevalencia de la discriminación en el ejercicio de las capellanías, la cual representa el 48.72% de los registros (19 casos). Este hallazgo es de suma relevancia, ya que indica que la labor de asistencia espiritual es el escenario de mayor fricción y vulnerabilidad para los líderes religiosos en el Distrito.

En un segundo nivel de incidencia, se encuentran las "Burlas" y el "Trato Displicente por parte de Servidores Públicos hacia Prácticas o Costumbres Religiosas", ambos con una participación del 15.38% (6 casos cada uno). La convergencia de estos datos revela una problemática latente en la función pública: un segmento significativo de las agresiones proviene directamente de agentes del Estado o se manifiesta en la interacción con la administración, lo que se refuerza con el 10.26% de casos asociados a "Disposiciones institucionales que obligan a los ciudadanos a actuar en contra de sus convicciones personales".

5. Campañas de sensibilización y comunicación

Durante 2025 se implementaron 10 campañas de sensibilización, entre ellas la Semana de la Armonía Interconfesional, "Juntos por la Libertad de Creencias" y "En tu voz está la clave", que contribuyen a la reducción de la intolerancia religiosa y a la prevención de conductas que puedan afectar el desarrollo de prácticas religiosas.



6. Actividades destacadas y eventos interreligiosos

Se destacó la realización de la Gala “Creencias que inspiran e impactan Bogotá”, así como foros, encuentros académicos y ferias de servicios, que fortalecen el reconocimiento del sector religioso y promueven entornos de respeto, reduciendo riesgos de interferencia en sus actividades y ceremonias.

En conjunto, estas acciones implementadas por la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia, fortalecen la capacidad institucional y social para prevenir, gestionar y atender situaciones que puedan interferir en el desarrollo de ceremonias religiosas, garantizando el ejercicio pleno de este derecho fundamental en el Distrito Capital.

16. ¿Cómo se está implementando la Política Pública de libertad religiosa en Bogotá frente a este tipo de situaciones?

La implementación de la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia⁴ se desarrolla bajo un enfoque de prevención, promoción, atención y articulación interinstitucional, orientado a enfrentar situaciones que puedan afectar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa.

En este contexto, frente a situaciones como las descritas, la Política Pública se implementa a través de las siguientes líneas estratégicas:

1. Prevención de vulneraciones y promoción del respeto por la diversidad religiosa

- Desarrollo de estrategias pedagógicas y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, orientadas a fomentar el respeto por la pluralidad religiosa y prevenir actos de intolerancia.
- Formación a servidores públicos y autoridades de policía, con el fin de fortalecer sus capacidades para la gestión de escenarios donde confluyen el ejercicio del culto y otros derechos fundamentales.
- Implementación de acciones orientadas a disminuir factores sociales e institucionales que generan discriminación o conflictividad asociada al hecho religioso, conforme a los objetivos de la política pública.

2. Fortalecimiento del diálogo interreligioso y la gestión territorial

- Consolidación de espacios de participación como los Comités Locales de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia, que permiten identificar riesgos, canalizar alertas tempranas y promover soluciones concertadas.
- Promoción del diálogo interreligioso e intercultural como herramienta de prevención de conflictos y fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

3. Ruta de promoción y atención por la libertad religiosa

- Implementación de la ruta de atención por la libertad religiosa, mediante la cual se orienta, acompaña y canaliza la atención de posibles vulneraciones.

⁴ Decreto Distrital 642 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gobierno” adoptó la Política Pública en la Parte 2 Título 1.



- Seguimiento a casos que involucren presuntas afectaciones al derecho, en articulación con las entidades competentes, garantizando un enfoque de derechos humanos.

4. Articulación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades

- Coordinación con entidades distritales y autoridades competentes para incorporar el enfoque religioso en la gestión de la convivencia y el orden público.
- Desarrollo de herramientas como sistemas de información, líneas base e indicadores, que permiten identificar tendencias, medir avances y orientar la toma de decisiones en la materia.

5. Reconocimiento del aporte social del sector religioso

- Implementación de estrategias para articular las iniciativas sociales y comunitarias de las entidades religiosas, reconociendo su papel en la construcción de paz, el tejido social y la resolución de conflictos.

En síntesis, la Política Pública se implementa mediante un conjunto de acciones integrales que buscan no solo reaccionar ante eventos específicos, sino prevenir su ocurrencia, fortalecer la convivencia y garantizar el ejercicio efectivo de la libertad religiosa en condiciones de igualdad y pluralismo, en armonía con los demás derechos fundamentales.

17. ¿Qué mecanismos existen actualmente para proteger los lugares de culto frente a actos de interrupción o irrespeto?

La protección de los lugares de culto en Bogotá se enmarca en la garantía integral del derecho fundamental a la libertad religiosa, entendiendo que estos espacios constituyen escenarios esenciales para el ejercicio colectivo del culto y la manifestación pública de las creencias.

En este sentido, no existe un esquema autónomo de custodia permanente asignado a las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, en tanto la protección material y el control del orden público corresponden a las autoridades competentes en materia de seguridad, conforme a sus funciones constitucionales.

No obstante, desde el ámbito Distrital, la protección de los lugares de culto se materializa a través de un enfoque preventivo, de articulación institucional y de garantía de derechos, que incluye, entre otras, el desarrollo de estrategias de sensibilización y promoción del respeto por la diversidad religiosa, dirigidas a la ciudadanía y a servidores públicos, la articulación interinstitucional con entidades del sector seguridad y convivencia, para la gestión de escenarios de riesgo en contextos de alta concurrencia, el acompañamiento y la interlocución permanente con organizaciones religiosas, que permite identificar alertas tempranas y coordinar acciones preventivas y la implementación de la ruta de promoción y atención de derechos fundamentales de religión, culto y conciencia, para la orientación y atención de posibles vulneraciones.

Adicionalmente, el ordenamiento jurídico colombiano contempla mecanismos de protección frente a conductas que afecten los lugares de culto, incluyendo disposiciones penales que sancionan la perturbación de ceremonias religiosas o los actos de irrespeto contra cultos legalmente permitidos.

En este marco, la protección de los lugares de culto no se limita a medidas de seguridad física, sino que se fundamenta en la prevención, garantía de derechos y articulación institucional, orientados a asegurar el respeto, la convivencia pacífica y el ejercicio libre de la libertad religiosa en la ciudad.



IV. Límites del derecho a la protesta

19. ¿Considera la Administración que irrumpir en una ceremonia religiosa constituye una forma legítima de protesta?

La Secretaría Distrital de Gobierno reitera que el ejercicio de los derechos fundamentales a la reunión y manifestación pública y pacífica, así como a la libertad de expresión, constituye un pilar esencial del Estado Social de Derecho. No obstante, su ejercicio debe desarrollarse en condiciones de respeto por los derechos de terceros, en particular la libertad de religión y culto, garantizando la coexistencia armónica de las distintas expresiones sociales en el marco de los principios de pluralismo, dignidad humana y no discriminación.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la Sentencia C-742 de 2012, el derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica no es absoluto, en tanto encuentra límites en los derechos de los demás, por lo que su ejercicio debe desarrollarse de manera pacífica y respetuosa. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, los Estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y reunión sin discriminación, así como de prevenir actos de violencia en contextos de protesta social, especialmente cuando se involucran grupos históricamente discriminados.

Para el caso concreto, conforme a la información verificada, no se configuró una irrupción al interior de los templos religiosos, en tanto los hechos espontáneos se desarrollaron en el espacio público aledaño. No obstante, se presentaron expresiones en dicho entorno que generaron incomodidad en feligreses, así como situaciones de tensión que derivaron en afectaciones y agresiones físicas a personas integrantes del colectivo convocante. La situación fue atendida de forma inmediata y oportuna evitando el aumento de la conflictividad, como se evidencia en la bitácora que se anexa a la presente.

En ese contexto, se reconoce que cualquier forma de violencia o agresión, provenga de quien provenga, resulta contraria al marco constitucional y comporta una vulneración de derechos fundamentales.

20. ¿Qué lineamientos existen para evitar que manifestaciones interfieran con actos religiosos o espacios de especial sensibilidad?"

La Administración Distrital implementa acciones de carácter preventivo y de gestión en territorio orientados a evitar interferencias entre manifestaciones y actividades en espacios de especial sensibilidad.

En desarrollo de lo anteriormente expuesto, y en lo que respecta a la Secretaría Distrital de Gobierno, se adelantan acciones de monitoreo de convocatorias, identificación de escenarios de concurrencia, coordinación con autoridades competentes y disposición de equipos de gestores y gestoras de diálogo social, quienes promueven canales de comunicación, articulación interinstitucional, acuerdos de convivencia y medidas de desescalamiento orientadas a mitigar riesgos y prevenir situaciones de confrontación.

Estas actuaciones se desarrollan bajo los principios de diálogo, prevención, proporcionalidad y respeto por la diversidad, con el propósito de garantizar el ejercicio concurrente y armónico de los derechos fundamentales en el espacio público, así como la protección de las personas y comunidades involucradas.

VI. Política Pública y coherencia institucional



26. ¿Cómo se armoniza lo ocurrido con lo dispuesto en el Plan Distrital de Desarrollo, especialmente en lo relacionado con la convivencia pacífica y el respeto a la libertad religiosa?

Los hechos ocurridos deben analizarse en el marco de los desafíos propios de la gestión de escenarios de concurrencia de derechos fundamentales, en los cuales pueden presentarse tensiones entre el ejercicio de la libertad religiosa, la convivencia ciudadana y otras libertades públicas.

El Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 “Bogotá Camina Segura” incorpora como eje transversal la garantía de los derechos humanos, la convivencia pacífica y el respeto por la diversidad, dentro de los cuales se encuentra el derecho fundamental a la libertad religiosa (artículo 19 de la Constitución Política).

Este instrumento de planeación se articula con la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia (Decreto Distrital 642 de 2025) y su plan de acción (CONPES Distrital 12 de 2019), los cuales establecen lineamientos orientados a:

- Promover el respeto por el pluralismo religioso.
- Prevenir situaciones de intolerancia, discriminación o conflicto asociadas al hecho religioso.
- Fortalecer la convivencia ciudadana desde un enfoque de derechos.

Desde esta perspectiva, la actuación institucional debe orientarse a garantizar la coexistencia armónica de derechos fundamentales, incluyendo la libertad religiosa (artículo 19 C.P.) y otros derechos como la protesta pacífica (artículo 37 C.P.), conforme a los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y armonización desarrollados por la Corte Constitucional (Sentencia C-742 de 2012).

En este sentido, lo ocurrido se enmarca en los supuestos previstos por el Plan Distrital de Desarrollo, el cual reconoce la necesidad de gestionar de manera anticipada y articulada los escenarios en los que confluyen diversos derechos fundamentales. La actuación institucional se orienta, en coherencia con este instrumento, a fortalecer las acciones preventivas, la coordinación interinstitucional y los espacios de diálogo, como mecanismos para garantizar el ejercicio armónico de la libertad religiosa y las demás libertades públicas. De esta manera, se reafirma el compromiso de la Administración Distrital con la promoción de la convivencia pacífica, el respeto por la diversidad y la consolidación de una cultura de derechos en la ciudad.

27. ¿Qué indicadores tiene el Distrito sobre respeto a la libertad religiosa y convivencia ciudadana?

El Distrito de Bogotá cuenta con un conjunto de indicadores definidos en el marco de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, orientados a medir tanto la percepción como las condiciones efectivas de respeto a este derecho y su relación con la convivencia ciudadana. Entre los principales se encuentran:

1. Índice de percepción negativa de líderes religiosos sobre el trato recibido por funcionarios públicos y medios de comunicación.
2. Porcentaje de percepción positiva de la ciudadanía sobre el reconocimiento y respeto de su libertad de religión, culto y conciencia.
3. Porcentaje de percepción positiva de líderes religiosos sobre el reconocimiento y respeto de su libertad de religión.



4. Índice de vulneración al derecho a la libertad religiosa y de cultos, que permite identificar la ocurrencia de posibles afectaciones.
5. Incremento en la participación de líderes religiosos en los Comités Locales de Libertad Religiosa, como indicador de fortalecimiento del diálogo y la articulación territorial.

Estos indicadores permiten no solo realizar seguimiento periódico al estado del derecho a la libertad religiosa en la ciudad, sino también identificar factores de riesgo, orientar acciones preventivas y fortalecer la toma de decisiones institucionales, en coherencia con los objetivos de la Política Pública y del Plan Distrital de Desarrollo en materia de convivencia pacífica y respeto por la diversidad.

28. ¿Qué ajustes normativos, institucionales o de Política Pública se consideran necesarios tras estos hechos?

Frente a los hechos ocurridos, es importante señalar que el Distrito ya cuenta con un marco normativo e institucional robusto en materia de libertad religiosa y de culto, así como con instrumentos de Política Pública orientados a la prevención de conflictos y la garantía de derechos. En este sentido, estas situaciones reafirman la importancia de continuar fortaleciendo las herramientas existentes, en el marco de los procesos de evaluación y mejora continua de la política pública.

En particular, la evaluación intermedia y reformulación de la Política Pública de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia se desarrolla en cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027, conforme a lo dispuesto en el artículo 253, y bajo los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Planeación. Este proceso constituye una oportunidad para ajustar y consolidar estrategias desde un enfoque preventivo y de gestión de riesgos sociales, en escenarios donde confluyen distintos derechos fundamentales.

En este marco, la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia podrá contribuir técnicamente mediante:

1. La incorporación de elementos de análisis en la evaluación de la Política Pública orientados a fortalecer la medición de la eficacia de las estrategias de prevención de conflictos asociados al hecho religioso, particularmente en contextos de alta concurrencia en el espacio público.
2. El fortalecimiento de líneas estratégicas orientadas a la promoción del respeto por la libertad religiosa en escenarios de coexistencia con otras libertades públicas, como la manifestación, bajo criterios de armonización, proporcionalidad y respeto por los derechos de terceros.

Cabe señalar que estos aportes se enmarcan en un proceso participativo, conforme a la Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito, lo que permitirá recoger insumos de la ciudadanía, organizaciones religiosas y demás actores relevantes, garantizando que los eventuales ajustes respondan a un ejercicio técnico, incluyente y coherente con las dinámicas sociales de la ciudad.

Así mismo, el 16 de abril, la Secretaría Distrital de Gobierno adelantará una reunión con la arquidiócesis de Bogotá, con el fin de discutir asuntos relacionados con la problemática social y eclesial en el centro de Bogotá y así definir conjuntamente con los actores involucrados los posibles ajustes institucionales.



VIII. De acuerdo con la información disponible en el Distrito Capital

32. ¿Está Bogotá garantizando de manera efectiva la protección de la libertad religiosa en el espacio público?

Con base en la información disponible, se puede afirmar que Bogotá sí cuenta con un andamiaje institucional, normativo y de Política Pública que permite garantizar de manera efectiva la protección de la libertad religiosa en el espacio público, a través de:

- La implementación de la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia.
- El desarrollo de estrategias de prevención de conflictos, sensibilización y promoción del respeto por la diversidad religiosa.
- La articulación interinstitucional para la gestión de escenarios de convivencia y la atención de situaciones que puedan afectar el ejercicio del derecho.

En este sentido, la garantía del derecho se materializa mediante acciones preventivas, pedagógicas y de coordinación institucional, orientadas a asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio del culto en el espacio público.

La ocurrencia de situaciones puntuales no desvirtúa la existencia de estas garantías, sino que se enmarca en los desafíos propios de escenarios de alta diversidad y concurrencia de derechos, los cuales son abordados mediante los mecanismos institucionales previstos.

33. ¿Qué garantías tienen hoy los ciudadanos de poder ejercer su fe sin ser interrumpidos o agredidos?

El núcleo esencial del derecho a la libertad religiosa comprende la posibilidad de profesar, practicar y difundir creencias sin interferencias indebidas, lo cual implica la obligación del Estado de garantizar condiciones de seguridad, respeto y protección frente a actuaciones de terceros.

En Bogotá, los ciudadanos cuentan con un conjunto de garantías normativas, institucionales y operativas que permiten el ejercicio libre de su fe, entre las cuales se destacan:

1. Marco normativo robusto

- a. Protección constitucional (artículo 19 de la Constitución Política) y legal (Ley 133 de 1994).
- b. Desarrollo de instrumentos distritales que operacionalizan estas garantías a través de la política pública.

2. Política Pública y acciones institucionales

- a. Estrategias de promoción del respeto por la diversidad religiosa.
- b. Programas de formación dirigidos a servidores públicos y ciudadanía.
- c. Implementación de la ruta de promoción y atención de derechos fundamentales de religión, culto y conciencia.



3. Articulación con autoridades de seguridad y convivencia

Coordinación con las entidades competentes para prevenir y atender situaciones que puedan afectar el ejercicio del culto en el espacio público.

4. Mecanismos de participación y diálogo

Espacios como los Comités Locales de Libertad Religiosa, que permiten identificar alertas, canalizar inquietudes y promover soluciones concertadas.

En consecuencia, el Distrito Capital dispone de un sistema integral de garantías que permite el ejercicio de la libertad religiosa en condiciones de respeto y seguridad, el cual se fortalece de manera permanente mediante acciones preventivas, de articulación institucional y de corresponsabilidad ciudadana.

Finalmente se reitera el compromiso con la promoción y garantía de los derechos humanos de la ciudadanía, los derechos de las comunidades del sector religioso que habitan Bogotá D.C., el diálogo y la mediación para la atención de los conflictos sociales, así como trabajar de manera articulada en la implementación de medidas preventivas que garanticen el ejercicio pleno de la libertad religiosa en el Distrito Capital, para la protección de los derechos fundamentales en escenarios de diversidad y pluralismo, en armonía con los principios de convivencia ciudadana y respeto por el orden constitucional.

Cordialmente,



LINA VANESSA LOZADA LEÓN.

Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos.

linav.lozada@gobiernobogota.gov.co

Anexos: Informe Rendición de cuentas SALRYC 2025

Instructivo de la Ruta de promoción y atención de derechos fundamentales de religión, culto y conciencia

Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia (2018-2028)

Bitácora 02 de abril de 2026.

Acta PMU 07 de octubre de 2025.

Copia Acta PMU 2 de abril de 2026

Proyectó: Luz Angela Castiblanco Duarte – Abogada Contratista SDG – SALRYC

Karol Vanessa Gonzalez Espinosa. -Contratista de la Dirección de DD.HH.

Diana Carolina Orozco Pérez – Profesional DCDS

Revisó: Flor Angélica Rueda Roza - Abogada Contratista SDG – SALRYC

Karol Jhoana Ayala Forero - Contratista SDG – DDHH.

Laura Estefanía García Proaño – Profesional DCDS

Lina Marcela Buitrago- Contratista SGGD


Olga Lucía Palacios Parada- Contratista SGGD-SG.

María del Pilar Velasquez Orjuela – Contratista SGGD

Aprobó: Julián Andrés Carvajal Zamora - Subdirector de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia.

Luz Amanda Guzmán Mojica – Directora de Derechos Humanos

Heinz Alejandro Torres Quintana – Director de Convivencia y Diálogo Social (E)

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

PROPOSICIÓN No. 338 DE 2026

Aprobada el 09 de abril de 2026

Aprobada en: Plenaria

CONCEJO DE BOGOTÁ 07-04-2026 12:07:55
A CONTINUAR CON EL N° 338 DE 2026 Y ANEXO
ORIGIN: 481 OFICINA ASISTENTE TECNICO FIDEL
DESBORO: SECRETARIA GENERAL/PODOTE GUSTAVARDO ELIAS
ASUNTO: MODIFICACION PROPOSICION 338 DE 2026
CMC:

Tema:

Garantías institucionales para la protección de la libertad religiosa, la convivencia ciudadana y los límites del ejercicio de la protesta en Bogotá D.C., en el marco de los hechos ocurridos durante la Semana Santa en la Iglesia de San Francisco.

Facultades:

De conformidad con las facultades legales del Concejo de Bogotá sobre control Político, consagradas en el artículo 14 del Decreto 1421 de 1993 y en los artículos 52 y 53 del Acuerdo 741 de 2019, y artículo 28 del Acuerdo 1014 de 2025, cítese a los siguientes funcionarios para que expongan ante el Cabildo y la ciudad un informe sobre el ejercicio de su gestión en relación con el tema mencionado:

Citados:

GUSTAVO QUINTERO ARDILA
Secretario Distrital de Gobierno

LUZ AMANDA GUZMAN MOJICA
Directora de Derechos Humanos

CÉSAR RESTREPO FLÓREZ
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

ROBERTO ANGULO
Secretario Distrital de Integración Social


CARLOS VLADIMIR RODRÍGUEZ VALENCIA
Alta Consejería para la Paz, Víctimas y Reconciliación

SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
Secretario de Cultura, Recreación y Deporte

Invitados:

JOSÉ DANIEL GUALDRÓN
Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Proposición No. 338 de 2026 aprobada el 09 de abril de 2026

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

TENIENTE CORONEL GERLY YAMILE MESA GALLO
Jefe de Derechos Humanos
Policía Metropolitana de Bogotá

ANDRÉS CASTRO FRANCO
Personero de Bogotá

JESÚS ANDRÉS IBARRA
Personero Delegado de derechos Humanos

IRIS MARÍN ORTIZ
Defensora del Pueblo

Sírvase contestar el siguiente cuestionario:

A los funcionarios de la administración:

I. Prevención y actuación institucional

1. ¿Qué acciones preventivas adoptó la Administración Distrital para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones religiosas durante la Semana Santa en Bogotá?
2. ¿Existía información previa sobre posibles manifestaciones o intervenciones en zonas de alta concentración religiosa?
3. ¿Qué coordinación interinstitucional se realizó entre las entidades distritales para prevenir alteraciones del orden público en estos espacios?
4. ¿Cuál fue la reacción institucional frente a los hechos ocurridos en la Iglesia de San Francisco y en qué tiempos se activaron los protocolos de respuesta?

II. Orden público y control territorial

5. ¿Cómo explica la Administración Distrital que una manifestación haya logrado irrumpir en un templo en pleno acto religioso sin contención previa?
6. ¿Qué protocolos se activaron para la protección de lugares de culto durante la Semana Santa y por qué no fueron suficientes?
7. ¿Qué evaluación hace la Administración sobre el riesgo de confrontación generado entre manifestantes y feligreses?
8. ¿Qué medidas correctivas se adoptarán para evitar la repetición de estos hechos?
9. ¿Cuántos efectivos se desplegaron para contener la perturbación del culto religioso en las 3 iglesias afectadas en el marco de la Semana Santa?

Proposición No. 338 de 2026 aprobada el 09 de abril de 2026

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

10. Sírvase informar si en los días 2, 3,4 y 5 de abril del 2026 había gestores de diálogo social enviados por la Dirección de Diálogo Social acompañando la marcha de los grupos autodenominados Transpetristas y Satanicas .
11. Sírvase informar si se activaron los PMU durante los hechos ocurridos en las iglesias San Francisco, Las Nieves y Las Aguas en el marco de la Semana Santa 2026, de ser así sírvase allegar la siguiente información:

a) Actas de instalación y cierre: en donde conste:

- Documento donde se consigna la hora de inicio y finalización del PMU.
- Identificación de las autoridades presentes.

- b) Informes de situación
- c) Relatos cronológicos de los hechos ocurridos.
- d) Registro de incidentes, número de participantes, afectaciones reportadas y medidas adoptadas.
- e) Reportes de gestores de diálogo y convivencia
- f) Observaciones sobre el comportamiento de los manifestantes.
- g) Registro de interacciones con comunidades religiosas y feligreses.
- h) Evidencia fotográfica o audiovisual de las recopilaciones, producidos en el PMU.
- i) Parte policial y de seguridad
- j) Número de efectivos desplegados.
- k) Acciones preventivas o de contención.
- l) Notificación de alteraciones al orden público.
- m) Recomendaciones posteriores
- n) Medidas para reforzar protocolos en futuros eventos.
- o) Alertas sobre riesgos de vulneración de derechos fundamentales.

12. Sírvase informar si activaron o no el PMU durante las marchas pro palestina desarrolladas el 7 de octubre de 2025 y que acciones se tomaron para evitar que se atacaran los lugares de culto, aportando registros fotográficos, audiovisuales y documentales producidos por el PMU Producidos durante las referidas marchas.

así mismo, sírvase informar y entregar evidencia física de registro de interacciones con las comunidades religiosas afectadas por parte de la administración.

13. Sírvase informar que acciones se tomaron por parte de la administración distrital después de los hechos ocurridos en las marchas del 7 de octubre de 2025, en donde se reportó un ataque Vandálico a la Iglesia Cristiana Dios Está Formando Un pueblo, para evitar que estas situaciones volvieran a presentarse A futuro.

III. Libertad religiosa y derechos fundamentales

14. ¿Reconoce la Administración Distrital que los hechos ocurridos constituyen una posible vulneración al derecho fundamental a la libertad de culto?
15. ¿Qué acciones concretas ha implementado el Distrito para garantizar el respeto a la libertad religiosa en espacios públicos y privados?

Proposición No. 338 de 2026 aprobada el 09 de abril de 2026

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

16. ¿Cómo se está implementando la política pública de libertad religiosa en Bogotá frente a este tipo de situaciones?
17. ¿Qué mecanismos existen actualmente para proteger los lugares de culto frente a actos de interrupción o irrespeto?

IV. Límites del derecho a la protesta

18. ¿Cómo define la Administración Distrital los límites entre el ejercicio legítimo de la protesta y la vulneración de derechos fundamentales?
19. ¿Considera la Administración que irrumpir en una ceremonia religiosa constituye una forma legítima de protesta?
20. ¿Qué lineamientos existen para evitar que manifestaciones interfieran con actos religiosos o espacios de especial sensibilidad?
21. ¿Se requiere ajustar la regulación del uso del espacio público en contextos de alta carga simbólica o religiosa?

V. Sanciones y aplicación normativa

22. ¿Qué acciones se han adelantado para identificar a los responsables de los hechos ocurridos?
23. ¿Qué medidas correctivas se han aplicado en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana?
24. ¿Qué conductas podrían configurarse como infracciones a la convivencia en este caso?
25. ¿Qué mensaje institucional se envía a la ciudadanía frente a la ausencia o debilidad de sanciones?

VI. Política pública y coherencia institucional


26. ¿Cómo se armoniza lo ocurrido con lo dispuesto en el Plan Distrital de Desarrollo, especialmente en lo relacionado con la convivencia pacífica y el respeto a la libertad religiosa?
27. ¿Qué indicadores tiene el Distrito sobre respeto a la libertad religiosa y convivencia ciudadana?
28. ¿Qué ajustes normativos, institucionales o de política pública se consideran necesarios tras estos hechos?

VII. Enfoque social y prevención de conflictos

29. ¿Qué rol ha desempeñado la Secretaría de Integración Social en la prevención de conflictos sociales derivados de diferencias ideológicas o religiosas?
30. ¿Qué estrategias tiene la Alta Consejería para la Paz, Víctimas y Reconciliación para prevenir escenarios de confrontación social en contextos de alta sensibilidad?
31. ¿Qué acciones de cultura ciudadana se están implementando para fortalecer el respeto por la diversidad de creencias en Bogotá?

VIII. De acuerdo con la información disponible en el Distrito Capital

Proposición No. 338 de 2026 aprobada el 09 de abril de 2026

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

32. ¿Está Bogotá garantizando de manera efectiva la protección de la libertad religiosa en el espacio público?
33. ¿Qué garantías tienen hoy los ciudadanos de poder ejercer su fe sin ser interrumpidos o agredidos?
34. ¿Cómo evitará la Administración que los lugares de culto se conviertan en escenarios de confrontación?
35. ¿Qué decisiones concretas tomará el Distrito para restablecer la confianza ciudadana frente a estos hechos?

Cordialmente,



MARCO ACOSTA RICO
Partido Colombia Justa Libres